

# *¡Los conflictos llegaron ya!*

**CÉSAR BEDOYA GARCÍA<sup>1</sup>**

Casi en sus primeros días de gobierno, el presidente Toledo tuvo que enfrentar una complicada coyuntura como fue la del conflicto desatado alrededor del intento de privatización de los servicios eléctricos en Arequipa, en junio de 2002. En adelante, las protestas y enfrentamientos no cesaron, hasta que otro escenario crítico se abrió en Ilave, Puno, en abril de 2004, con la lamentable muerte del alcalde de la provincia de El Collao, Cirilo Robles, a manos de una enardecida turba.

El presidente García también ha empezado a pagar tempranamente su derecho de piso. A poco de iniciar su gestión se le presentó una papa caliente, largamente cocinada: el conflicto entre pobladores y la empresa minera Yanacocha, esta vez expresado en la protesta protagonizada por los habitantes de Combayo, en Cajamarca, con el trágico saldo de una persona muerta, el comunero Isidro Llanos. Casi inmediatamente sobrevendría el conflicto en las inmediaciones del río Corrientes, en Loreto, entre las comunidades nativas achuar y la empresa Pluspetrol, en torno a la contaminación del río y sus graves impactos sobre la salud de los habitantes de dicha cuenca, donde felizmente no hubo víctimas que lamentar pero sí enfrentamientos violentos y toma de instalaciones.

Siguiendo con atención el reporte que la Defensoría del Pueblo ha venido difundiendo puntualmente cada mes desde mayo de 2004 a la fecha, la mayoría de los conflictos registrados se relacionan con disputas entre ciudadanos y autoridades locales. En segundo término estuvieron los conflictos de carácter laboral o gremial, seguidos muy de cerca por los desatados entre comunidades vecinas y proyectos mineros.

La escalada de conflictos y su frecuencia motivó la producción de algunos interesantes análisis sobre sus causas subyacentes y características centrales.

A partir de lo sucedido en Ilave, se pusieron sobre el tapete hipótesis referidas a la exclusión que viven amplios sectores sociales en el país, donde la exclusión política coincide con la carencia de derechos sociales, económicos y culturales. A esta dramática situación se suma la crisis de representación y la ausencia de organizaciones políticas que articulen los intereses de los diversos grupos sociales y canalicen la competencia por los recursos (tangibles y simbólicos) hacia la arena de la confrontación política.<sup>2</sup>

Ya la Comisión de la Verdad y Reconciliación había planteado en su *Informe final* una serie de elementos de juicio para entender la década de violencia que vivimos en el país, así como pistas muy concretas sobre las condiciones en las que se configuran los nuevos escenarios. En esa línea de análisis, Carlos Meléndez plantea hipótesis a manera de preguntas en su interesante ensayo:<sup>3</sup> ¿Existe continuidad entre la matriz de violencia política desarrollada a partir de la década de los ochenta y los conflictos actuales entre autoridades y sus pueblos? ¿Es la pobreza caldo de cultivo para los conflictos sociales? ¿La existencia y uso de mecanismos formales de participación ciudadana disminuyen las posibilidades de conflicto social? ¿El retiro de los partidos políticos nacionales de las zonas más alejadas del centro del país y la presencia de políticos independientes como autoridades estatales aumentan los riesgos de estallidos de violencia social a partir de conflictos locales?

Las respuestas anotan que, en efecto, algunos de los motivos que llevaron al desencadenamiento de los conflictos locales a lo largo de la década de 1990 tienen que ver con la persistencia de ciertas condiciones que sirvieron de acicate para el desencadenamiento de la violencia en los ochenta. La pobreza sigue siendo un terrible telón de fondo de muchos de los conflictos actuales; las sumamente críticas condiciones de vida en las que aún subsiste más de un tercio de la población nacional permanecen sin variar un ápice.

Por otro lado, una de las más graves consecuencias del prolongado conflicto armado fue la práctica destrucción del tejido social en muchas zonas del país: autoridades locales y líderes de la sociedad civil fueron muertos, desaparecidos u obligados a huir; las instancias de agregación de intereses y de intermediación simplemente fueron arrasadas. Por último, ante una precaria organicidad social y política, fueron emergiendo de manera progresiva, como agentes sustitutos para la intermediación entre el Estado y la sociedad, los «independientes». Estos «independientes» han venido actuando como «operadores» políticos sin filiaciones ni lealtades orgánicas, ideológicas y, mucho menos, partidarias.

La idea de los «operadores» políticos fue luego más desarrollada por Meléndez,<sup>4</sup> quien plantea enfáticamente que el país carece de vínculos de intermediación entre ciudadanos y autoridades estatales que permitan establecer patrones ordenados de canalización de demandas, la garantía de un Estado de derecho y una adecuada representación política. Según Meléndez, el andamiaje político institucionalizado que mal que bien existía en amplias zonas del país ha sido reemplazado por agentes intermediarios y operadores políticos que aprovechan las oportunidades que se abren en el escenario actual. Esta desagregación de intereses no solo lleva a la fragmentación política, sino también sienta las bases para que se instituya una suerte de progresiva y extensiva privatización del poder.

Otras interpretaciones han incidido en la debilidad de los actores políticos y en lo que se ha denominado «una democracia sin partidos»,<sup>5</sup> expresada en una competencia protagonizada por una pléyade de actores políticos frágiles, cuyo correlato fáctico se muestra de manera descarnada en el conjunto de características centrales de los nuevos conflictos sociales en el país: su inorganicidad, dispersión, ausencia de relación con grupos de agregación (partidos, gremios) e inusitada violencia. Otra hipótesis<sup>6</sup> sugiere que en el país operan dos lógicas que se alternan, que no se contraponen. Esto es, la convivencia de lógicas que no acaban por confluir o integrarse y que no necesariamente tendría que ser así: el juego entre un sistema político instituido y la movilización social activa, sin necesarios referentes de organicidad y articulación. Como sostiene Grompone, asistimos a un escenario signado por un pluralismo institucional que separa partidos o movimientos en un ambiente político que se vuelve estructuralmente inestable y con desenlaces siempre abiertos e inciertos.

Recientemente, para tener un cuadro sintético sobre los conflictos sociales en el país y contribuir a la construcción de la paz, Iván Ormachea<sup>7</sup> hace el esfuerzo por detectar las fuentes comunes que los desencadenan y cita, entre otras, la exclusión; la inacción o ineficiencia del Estado; la crisis de las organizaciones de representación, fundamentalmente de los partidos; la fragmentación y debilidad de las organizaciones de la sociedad civil; la crisis de valores; la desconfianza entre los múltiples actores sociales, sus autoridades y representantes; los recursos escasos; la existencia de ciertos «demonios» que los peruanos aún no logran exorcizar (traumas que van desde la conquista, la guerra con Chile, la década de violencia política).

Hay, pues, una serie de intentos de análisis, comprensión y explicación sobre cómo se viene configurando la nueva conflictividad social en el país, qué factores pueden estar activándola, expandiéndola y, en algunos casos, haciéndola inmanejable o altamente recurrente (conflictos entre comunidades y empresas mineras, por ejemplo). En este punto, nos parece importante dejar sentado que el conflicto es consustancial al hecho social. La clave está en cómo hacer de él una oportunidad para redefinir los patrones y circunstancias que los desencadenan y conducen a extremos violentos. No hay que hacer de ellos un argumento para el garrote o el bloqueo de los espacios y mecanismos democráticos para abordarlos de manera eficiente y eficaz. Para eso están la prevención, la información oportuna, el diálogo, la negociación, los espacios de participación y concertación.

## **DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO**

Así como contamos con análisis sistemáticos de los conflictos en el país, disponemos también de un buen número de fuentes de calidad que nos ofrecen información detallada y de primera mano sobre el tema.

El reporte mensual que elabora la Defensoría del Pueblo es un recurso fundamental y está disponible en su página web (<http://www.defensoria.gob.pe>). Allí se encuentra la estadística básica sobre los conflictos por localidad geográfica, niveles de vida (no pobre, pobre, muy pobre, pobre extremo), estado (activos, latentes, resueltos) y asuntos en disputa. A las cifras y cuadros le sigue un breve análisis general y el estudio de un grupo de casos. La Defensoría del Pueblo ha editado un informe de balance<sup>8</sup> sobre las acciones que ha realizado, explicando su campo de acción y el alcance de sus intervenciones, donde analiza los casos más relevantes (Andahuaylas, Ilave, Suyo, Lagunas, Tambogrande).

Desde 2004, Desco produce un detallado reporte trimestral de conflictos, protestas y eventos sociales y políticos importantes, al que se accede por suscripción. Contiene análisis de procesos y coyuntura, con énfasis en las motivaciones, objetivos y causas de las acciones colectivas puestas bajo la lupa. A ello se suma una completa cronología de eventos.<sup>9</sup>

El Grupo Propuesta Ciudadana trabaja de manera orgánica y sistemática sobre el proceso de

descentralización en el país. Uno de sus aportes es el reporte «Vigilancia de las industrias extractivas», que edita desde 2005, cuyo más reciente número incorpora un acápite dedicado al análisis de conflictos en dicho sector.<sup>10</sup>

Cooperación ha puesto hace poco en circulación su «Informe de conflictos mineros», y anuncia que será una edición periódica. Contiene una breve visión sobre los conflictos que vienen presentándose en este sector, y el seguimiento y análisis de casos como el de Majaz, Tintaya y Las Bambas.<sup>11</sup>

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) edita de manera trimestral la *Revista del Observatorio Social de América Latina* (OSAL), centrada en analizar los movimientos sociales en la región. Ofrece análisis de casos por país y cronologías de conflictos por región y país (sur, andina y norte). Los números son temáticos. El más reciente estuvo dedicado a los movimientos sociales y gobiernos en la región andina.<sup>12</sup>

La información disponible puede servir de base no solo para los análisis, sino brindar las pistas para rastrear hacia dónde se orientan los movimientos sociales y cómo hacer para actuar de manera preventiva cuando sea necesario, pues generalmente los abordajes se suelen realizar cuando los conflictos ya se han desencadenado, están en ascenso o en fase de crisis. ■

1 Sociólogo. Socio de la firma consultora ProDiálogo. Docente del Diplomado de Gestión de la Responsabilidad Social en la PUCP y de la Escuela de Psicoanálisis Clínico y Aplicado.

2 Degregori, Carlos Iván. *Ilave: desafío de la gobernabilidad, la democracia participativa y la descentralización*. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, 2004.

3 Meléndez, Carlos. «Hipótesis sobre los conflictos en el Perú actual». Lima: Transparencia, 2004.

4 Meléndez, Carlos. «Mediaciones y conflictos: las transformaciones de la intermediación política y los estallidos de violencia en el Perú actual». En Víctor Vich, editor. *El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia*. Lima: IEP, 2005.

5 Tanaka, Martín. *Democracia sin partidos. Perú 2000-2005*. Lima: IEP, 2005.

6 Grompone, Romeo. *La escisión inevitable. Partidos y movimientos en el Perú actual*. Lima: IEP, 2005.

7 Ormachea, Iván. «Conflictos sociales y construcción para la paz: dónde estamos y cómo construir». ProDiálogo. Documento presentado a la Mesa Temática «Construcción de paz y conflictos sociales» de Catholic Relief Services. Lima, octubre de 2006.

8 Defensoría del Pueblo. *Ante todo el diálogo. Defensoría del Pueblo y conflictos sociales y políticos*. Lima: Defensoría del Pueblo, 2005.

9 Véase <<http://www.desco.org.pe>>.

10 Grupo Propuesta Ciudadana. «Vigilancia de las industrias extractivas». Reporte Nacional n.º 4. Lima, septiembre de 2006. Disponible en <<http://www.participaperu.org.pe>> o solicitarlo a <[propuest@desco.org.pe](mailto:propuest@desco.org.pe)>.

11 Disponible en <<http://www.cooperacion.org.pe>>. *del Observatorio Social de América Latina* (OSAL), año VII, n.º 19, enero-abril. Buenos Aires, 2006. Véase <<http://www.osal.clacso.org>>.